

EL DERECHO

ORGANO OFICIAL

de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, correspondiente de la Real de Madrid

—TERCERA EPOCA.—

Semanario de Jurisprudencia, Legislación, Economía Política y Ciencias Sociales.

*S'il n'y avait pas de justice
il n'y aurait ni gouvernement ni société.*

EDOUARD LABOULAYE.

TOMO III.

MEXICO, 27 DE FEBRERO DE 1892.

NUM. 9.

Estudios de Derecho.

Apuntes de alegato que presenta el que suscribe, como abogado del Sr. Juan Georges, en el juicio sumario que ha entablado contra el Sr. J. Courtin, sobre cumplimiento de contrato, pago de daños y perjuicios, intereses y costas.

HECHOS

El 23 de Julio de 1890, hallándose en París los Sres. J. Courtin y Juan Georges, firmaron un contrato bilateral de servicios y pago de sueldos en la forma siguiente: "Ha sido convenido entre Courtin y Georges que éste se compromete á ir el 21 de Agosto de 1890, á cualquier lugar de embarque donde pueda tomar vapor francés para Veracruz (México); á fin de que ya en esta Capital entre como obrero en dulcería, á la casa de Sr. Courtin. Allí deberá permanecer Georges durante tres años consecutivos, á contar desde el día de su entrada á la colocación, prometiendo ser cuidadoso en su trabajo y de los intereses de su patrón, lo mejor que le fuere posible por su asiduidad, durante todo el tiempo del contrato.

Por su parte el Sr. Courtin se compromete á pagar á Georges durante el mismo tiempo, (\$ 80) ochenta pesos cada mes; á darle la misma alimentación de su propia familia, y alojamiento; dicho sueldo empezará á correr desde el día primero de Septiembre de 1890. El mismo Sr. Courtin, para garantía del cumplimiento por parte de Georges, tiene el derecho de retener á éste (\$ 20) veinte pesos cada mes de sus sueldos, debiendo restituirle toda la cantidad á que estas sucesivas reten-

ciones monten, después de los tres años del contrato, pero abonándole el seis por ciento al año.

Para garantía de ambos contratantes se convino igualmente, en que el contrato sería ratificado en México por ante un Notario, conforme á las leyes mexicanas. Tal es el contrato celebrado entre los Sres. Courtin y Georges y cuyo cumplimiento con todas sus condiciones y consecuencias ha demandado éste, después de catorce meses de haber sido llenado por ambas partes. Las razones de hecho y de derecho invocadas por Georges, son las siguientes:

Courtin, en ejercicio de la facultad que se reservó en el contrato, había retenido á Georges la cantidad de (\$ 200) doscientos pesos de los sueldos de éste, lo cual quiere decir, que durante diez meses y á contar desde el 1.º de Septiembre de 1890, Courtin había empezado á retener á Georges (\$ 20) veinte pesos cada mes, y que dejó de hacerlo desde el 1.º de Julio de 1891. En efecto desde esta fecha en adelante, y demostrándose así que Courtin ya no juzgó necesario, para garantía de que Juan Georges cumpliera sus obligaciones, el ejercicio de aquella facultad, comenzó á pagarle los (\$ 80) ochenta pesos íntegros de su sueldo, hasta el mes de Octubre inclusive del mismo año, pues el 3 de Noviembre siguiente, tuvo lugar un disgusto entre ambos contratantes. Separado Georges por Courtin el día 3 de Noviembre, haciéndole sacar de la casa por un gendarme á pretexto de que no era bastante hábil en su oficio, Courtin ha sido el primero en faltar á las obligaciones del contrato relacionado, sin motivo alguno por parte de Georges, quien por lo mismo reclama además, por vía de perjuicios la cantidad de (\$ 1840) mil ocho-

cientos cuarenta pesos, á que asciende la suma de todos los sueldos por pagar, á razón de (\$ 80) ochenta pesos cada mes, y hasta el 1° de Septiembre de 1893; ó sea hasta el vencimiento del plazo del contrato. Y como según el contexto de éste mismo, debía Courtin dar á Georges, además de su sueldo, la alimentación que debía ser la misra de la familia de aquél, y habitación, Georges demandó también á Courtin la cantidad de (\$ 2660) dos mil seiscientos sesenta pesos, igualmente por vía de perjuicios, pues esa suma importan los alimentos y habitación á que el citado Georges tenía derecho, á razón de (\$4) cuatro pesos diarios durante seiscientos sesenta y cinco días, ó sea desde el 3 de Noviembre en que fué separado por Courtin, hasta el 1° de Septiembre del año de 1893, término como queda dicho, del plazo del contrato. Si á estas distintas cantidades se añade lo que importa el interés del seis por ciento anual que Courtin debía abonar á Georges por la suma de (\$ 200) doscientos pesos de que he hablado al principio, y haciendo la operación solamente hasta el día 1° de este mes, resulta que Courtin es también deudor á Georges de la cantidad de (\$ 17 70 cs.) diez y siete pesos setenta centavos. Así pues, el monto de la demanda de Georges se forma de las siguientes partidas:

Por la retención de \$ 20 cada mes desde 1° de Septiembre de 1890 hasta 1° de Julio de 1891.	\$ 200 00 cs.
Por interés de esta cantidad á razón del 6 p ^o anual y hasta 1° de Febrero de 1892.....	17 70 „
Por sueldos por pagar á razón de \$80 cada mes y á contar desde 1° de Noviembre de 1891, hasta 1° de Septiembre de 1893....	1840 00 „
Por alimentos y habitación á razón de 4 pesos diarios durante 665 días, ó sea desde el 3 de Noviembre último, hasta 1° de Septiembre de 1893.....	2660 00 „
Suma.....	\$ 4717 70 cs.

DERECHO.

Veamos ahora cuales son los fundamentos de derecho, que justifican la pretensión de Georges, para que Courtin sea condenado al pago de la expresada suma.

Primera cuestion.—¿Es válido el documento cuyo cumplimiento ha exigido Georges?

Si examinamos esta cuestión, desde el punto de vista de la forma de dicho documento, consta que fué presentado por Georges, tal como había sido suscrito en París, ó sea sin los timbres que nuestra ley Federal de 31 de Mayo de 1887, exige en sus arts. 15 y 94. Con este motivo la parte de Courtin, en incidente separado y por escrito de 13 de Noviembre último, se constituyó denunciante de la infracción de la Ley del Timbre, desglosándose el documento del contrato presentado por Georges y remitiéndose á la Oficina respectiva, por auto del 14 del mismo mes que obra en el cuaderno principal (fjs. 4) Georges arregló en la Administración Principal de la Renta del Timbre, la revalidación del contrato, y fecho lo presentó de nuevo con oficio del jefe de aquella oficina, para que obrara en los autos respectivos. ¿Cuál es el valor legal de esa revalidación? Indudablemente, ó ella nada significa, ó importa la corrección radical del defecto de que en un principio adoleciera dicho documento, debiendo desde entonces considerarse, como si ninguno tuviera y capaz de producir todos los efectos legales.

Si á lo anterior se agrega que la parte de Courtin, al contestar el traslado de la demanda, no opuso, como quizá podría haberlo hecho, en su escrito de 14 de Noviembre citado, la excepción dilatoria por defecto en la firma legal de proponer la demanda, claramente resulta, que el documento tantas veces repetido, debe considerarse como bien presentado para acompañar y apoyar aquella, sin que valga en contrario decir, que se presentó para entablar un juicio, un documento que no podía producir efectos legales en la República, pues por derecho debía producirlos, por la revalidación y está prohibido á los jueces tomar de oficio en cuenta, excepciones que no hayan sido opuestas en la contestación de la demanda. (Art. 605 del C. de P. C.)

La falta de objeción del documento que nos ocupa, por parte del Sr. Courtin, se manifiesta, no solo, como acabamos de decir en no haberlo atacado por vía de excepción dilatoria, al contestar la demanda, sino en el hecho de que reproducido por la parte de Georges, para que se tuviera como parte de su prueba (escrito de 26 de Noviembre, cuaderno de prueba de Georges, fojas 16), Courtin manifestó hasta el día 1° de Diciembre (escrito de Courtin de la fecha, cuaderno de prueba de Georges fojas 11) que no estaba conforme con él, prometiendo manifestar a su tiempo y en la forma legal, los

vicios de que adolecía conforme á derecho. Ahora bien, el auto del Sr. Juez 5.º de lo Civil al escrito de Georges, es de 26 de Noviembre, conforme al art. 115 inciso VIII del Código de Procedimientos Civiles, tenía Courtin tres días para objetar el documento en cuestión; según el art. 100 del mismo Cuerpo de Leyes, en los términos judiciales que corren desde el día siguiente al de la notificación, debe contarse el día de vencimiento; luego el Sr. Courtin con su escrito de 1.º de Diciembre, hizo la objeción de que tratamos, á los cuatro días de haberla podido formular. Basta ver un calendario del año próximo pasado para convencerse de esto: los días 27, 28 y 30 fueron los tres en que el Sr. Courtin pudo ejercitar su derecho, pues el 29 fué Domingo. Habiéndolo hecho después, el documento en cuestión, debe tenerse por admitido y surtir todos sus efectos (art. 451 del Código de Procedimientos Civiles).

Segunda cuestión.—¿Cuál es el valor del mismo documento, en cuanto á su fondo? Establecido que el contrato celebrado en París, entre Georges y Courtin y presentado por el primero, al entablar el presente juicio, no merece ningún reproche en cuanto á su forma, por parte del segundo, lo cual además de lo dicho, se corrobora por la circunstancia de haber el Juez de los autos, dado la demanda por contestada en sentido negativo, por auto de 14 de Noviembre, consentido por Courtin y sin que aparezca que suscitó ningún incidente de previo y especial pronunciamiento, entremos á considerar el mismo instrumento en cuanto á su fondo. La más obvia reflexión basta para convencerse de que Courtin y Georges, celebraron en París un contrato bilateral por el que mutuamente contraían y reportaban derechos y obligaciones. Derechos en favor de Courtin, los de recibir los servicios de Georges y de retenerle (\$20) veinte pesos cada mes, durante todo el tiempo del contrato. Obligaciones del mismo Courtin, las de pagar á Georges un salario de (\$80) ochenta pesos mensuales, darle alojamiento y alimentos, durante todo el tiempo del contrato y restituirle al cabo de este mismo, el pago del interés del seis por ciento anual, la suma á que montasen las sucesivas retenciones de parte de su sueldo. Derechos de Georges; el sueldo que queda mencionado, el alojamiento, los alimentos y el pago del rédito referido. Obligaciones de Georges: trasladarse á México el 21 de Agosto de 1890 para entrar como obrero en la casa de Courtin; cuidar allí de los intereses de éste, por todo el tiempo del

contrato y consentir que Courtin le retenga (\$20) de su sueldo cada mes. Sin duda alguna que esta obligación, es típica en la clase de las bilaterales. Esto supuesto ¿podrá decirse como quizá lo pretenda la parte contraria, que Courtin no contrajo obligación alguna, estando todas á cargo de Georges y que por tanto, aquel pudo no cumplir impunemente con el contrato relacionado? Si así fuera la validez y el cumplimiento de los contratos, estaría al arbitrio de uno solo de los contrayentes y podrían revocarse por la voluntad de uno solo de ellos, contra la expresa prohibición de los arts. 1,278 y 1,419 del Código Civil.

Tercera cuestión.—¿Cuál es el valor jurídico de la parte final del contrato, por la cual convinieron los otorgantes en que aquel sería ratificado en México, para garantía de los mismos, por ante un Notario y en los términos aceptados por las leyes de este país? De seguro que no siendo necesaria como no lo es, ni según las leyes francesas, ni conforme á las de México, la formalidad de un instrumento público para hacer constar un contrato de la especie del que nos ocupa (1,322 del Código Civil), el único fin de los contratantes al convenir aquello, fué garantizarse recíprocamente el cumplimiento de sus obligaciones, en el sentido de las leyes del país. Si pues acabamos de demostrar que estas no exigen en el presente caso; la formalidad á que los contratantes se refieren, resulta fuera, de duda, que la falta de ratificación en esa forma nada le quita al contrato de su validez intrínseca, sobre todo si se toma en cuenta, que según el art. 14 del Código Civil los extranjeros que otorgan un contrato fuera de México, quedan en libertad para sujetarse á las formas y solemnidades prescritas, por las leyes mexicanas, en los casos en que el acto haya de tener ejecución en México.

Fuera de esto queda demostrado en los autos por confesión del mismo Sr. Courtin, que hace prueba plena según el art. 546 del Código de Procedimientos Civiles, que este cumplió el contrato durante catorce meses y á contar desde el 1.º de Septiembre de 1890, ya teniendo á Georges, como obrero en dulcería en su casa (Respuesta de la posición primera, cuaderno de prueba de Georges), ya dando á Georges hasta el 3 de Noviembre último habitación y alimentos (Id. á la posición cuarta cuaderno id.), ora teniendo á su servicio á Georges en cumplimiento del contrato (Id. á la posición segunda cuaderno id.), ora en fin deduciendo á Georges, veinte pesos cada mes y durante diez,

y pagándole después su sueldo íntegro de ochenta pesos, hasta su separación (Id. á las posiciones 9, 12 y 13 del cuaderno id.). Si á esto se agrega que Courtin mismo ha confesado haber ejecutado todos esos actos *en cumplimiento* del contrato, creemos no ser posible ni la menor duda sobre que el convenio, á pesar de no constar en escritura pública, ha sido cumplido voluntariamente por aquél. Ahora bien, si la ratificación y el cumplimiento voluntario, aún de una obligación nula, por falta de forma ó solemnidad, impiden en cualquier tiempo en que se hagan, la acción de nulidad ¿qué deberá decirse en orden á un contrato que como queda demostrado no necesitaba aquellas (art. 1679 del Código Civil.)?

“*Quod ab initio fuit voluntatis ex-post facto sit necessitatis.*” Finalmente y aún suponiendo necesaria la formalidad de que se trata ¿á quién incumbía su cumplimiento? ¿á Georges sólo ó también á Courtin? Indudablemente que ambos, y si es así, Courtin no puede hacerse un título de su propia falta, conforme al viejo adagio jurídico: “*Nulli fraus sua vel dolus patrocinari debet.*” Por la misma razón, no podría decirse que se trata aquí de una obligación condicional, como quizá lo pretenda la parte de Courtin, para deducir que ninguna obligación ha existido á cargo de él, hasta que la condición se cumpliera en el sentido de los arts. 1,329 y 1,331 del Código Civil. Porque en primer lugar se opone á esta interpretación del contrato que nos ocupa, la etimología misma de la palabra “condición” que se deriva de *condere, conditum*, modos de un verbo que significa establecer, fundar, hacer, en una palabra, que una cosa no exista sino de cierta manera. La condición en las obligaciones, sobre todo la condición suspensiva, importa la causa y origen de la obligación, el móvil único que las ha hecho aceptar por los contratantes, quienes solo han pensado en ella y en cumplirla mediante la realización de la condición misma. Esta y no otra es la verdadera naturaleza de los contratos sujetos á condición, como puede verse en todos los tratadistas de esta materia, (Molitor, obligations en droit romain, tom. I núm. 122—Larombiere, Theorie et pratique des obligations art. 168, núm. 1.—Van-Wetter, Les obligations en droit romain, tom. II pág. 167; y es de notarse en el texto del mismo art. 1329 de nuestro Código Civil. Si pues queda demostrado por confesión del mismo Sr. Courtin, que él ha cumplido el contrato que nos ocupa, durante catorce meses y

en la parte que le correspondía ¿aún podría decirse sin absurdo, que se trata aquí de una obligación cuya eficacia y cumplimiento dependían de una condición? Y si en algún contrato cabe asegurar, que los contratantes no tuvieron la intención de obligarse condicionalmente es, en éste, en que expresamente declararon querer, que el contrato fuese ratificado en México, por ante Notario público para garantía de *ellos mismos*. La obligación pues existía desde ántes de eso que arteramente se querría llamar condición, porque no se ratifica sino lo que ya existe.

Más supongamos por un momento, sin conceder nunca, tamaño contrasentido jurídico, que estamos aquí en presencia de una condición. ¿De qué clase sería ésta? Hemos hecho notar ántes que tanto Courtin como Georges, podían para su respectiva seguridad, pedir la ratificación innecesaria del contrato por ante un Notario público en México.

Si es así, la pretendida condición sería de la clase de las potestativas ó voluntarias, en el sentido del art. 1334 del Código Civil y debería tenerse por cumplida, puesto que había dejado de realizarse por hecho voluntario del obligado, á no ser que se pretenda, contra lo que expresa el contrato, que solo Georges podía pedir la ratificación en la forma indicada y no Courtin.

Cuarta cuestión.—¿Establecido en su forma y en su fondo el contrato celebrado entre los Señores Courtin y Georges, ha faltado el primero á él, según aparece de las pruebas rendidas? La resolución afirmativa á esta pregunta solo podría dar márgen á vacilaciones para quien no temiera proceder en sus actos con cínica mala fé. En efecto el mismo Courtin ha confesado haber recibido los servicios de Georges, hasta el día 3 de Noviembre último (Respuesta á á la posición tercera cuaderno de prueba de Georges) pagándole hasta ese día el deber de habitación y alimentos (Id á la posición cuarta cuaderno id.) y hasta el mes de Octubre inclusive el sueldo convenido; (Id, á la posición trece, cuaderno id.) que el día 3 de Noviembre se disgustó con Georges (Id. á la posición quinta cuaderno id.) yendo con este motivo en unión de Georges á la Comisaría de la cuarta Demarcación (Id. á la posición sexta cuaderno id.) donde imputó á éste el haberle cometido faltas (Id á la posición séptima cuaderno id.): que ha separado á Georges del servicio que le presentaba, porque cree que éste no cumplía con su deber (Id á la posición décima cuaderno id.), y porque lo injuriaba. ¿Qué me-

jor prueba que la confesión misma de Courtin, sobre que Georges no se separó voluntariamente, sino que fue separado por aquél? Ahora bien, la confesión judicial hace prueba plena, cuando concurren en ella los requisitos que menciona el art. 546 del Código de Procedimientos Civiles, requisitos que en el caso se han cumplido.

Podrá prosperar en contrario la excepción que se pretendiera hacer valer, y consistente, ya en que Georges no era hábil en su oficio, (Escrito de la contraria, contestando el traslado de la demanda, ora en que él mismo injurió á su principal (Respuesta á la posición décima, cuaderno de prueba de Georges, excepción por la cual pretendió el demandado á lo ménos debilitar la acción deducida? Responda á esta pregunta el hecho bien significativo de que Courtin, no ha rendido ninguna prueba en estos autos, con lo cual ha quedado en el caso de mera afirmación gratuita su excepción, faltando al deber que le imponía el art. 354 del Código de Procedimientos civiles, é incidiendo en la pena á que se refiere la segunda parte, inciso I, del art. 143 del mismo Cuerpo de Leyes. Y no se diga que la excepción está probada por el mismo Georges, quien ha confesado, al articular la posición quinta á Courtin, que éste se disgustó con aquél, y que además lo está por la pregunta sexta del segundo interrogatorio (cuaderno de prueba de Georges), por donde consta que éste dejó de habitar el cuarto que ocupaba, en unión de otros dependientes de Courtin, á pedimento de éste y por orden de la cuarta Demarcación de Policía. Porque en primer lugar ese disgusto, según los términos de la posición quinta partió de Courtin y fué víctima de él Georges ¿Acaso no se concibiría que una persona se disgustase con otra, sin que ésta presentara otra actitud que la pasiva de víctima? Si pues de esa confesión, hecha en efecto por Georges, no puede inferirse otra cosa, salvo que se violenta el sentido de las palabras al capricho de la preocupación, ella más bien sirve de apoyo á la afirmación que ántes hemos asentado, de que Courtin ó sólo éste, ha faltado al contrato celebrado con Georges.

En cuanto al segundo punto, ó sea el relativo á que Georges dejó de habitar el cuarto que ocupaba para habitación, á pedimento de Courtin y por orden de la cuarta Demarcación, algo más que preocupación, es á saber: mala fé, significaría querer convertir este hecho en contra del que ha sido su víctima, tanto por parte de Courtin, que sin

duda, como el mismo lo ha confesado. (Respuesta á la posición septima cuaderno de prueba de Georges) imputó á Georges faltas que no está probado haya cometido, cuando por parte de la Oficina misma de Policía, que ningunas facultades tenía por la naturaleza de sus atribuciones, para dar por rescindido un contrato de arrendamiento, del cual era fiador Courtin (Respuesta de los testigos Bustillos y Fleury á la repregunta primera cuaderno de prueba de Georges). La policía no tiene por objeto en México, sino prevenir todos aquellos actos, que por la vehemencia de las pasiones de los que en ellos intervienen, hacen temer prudentemente que degeneren en delitos. Fuera de esta facultad y de la obligación de dar cumplimiento á las órdenes motivadas de los jueces competentes, jamás la policía podría salirse de su papel de simple vigilancia, sin invadir gravemente la esfera inviolable de los derechos del hombre, con manifiesta infracción del art. 16 constitucional. Por manera que; aún suponiendo que Courtin hubiera rendido en la Oficina de la 4.^a Demarcación, alguna prueba de sus asertos en contra de Georges, la conducta abusiva que aquella observó decidiendo *ex cathedra* una cuestión civil como es siempre la desocupación de un cuarto habitado, nunca podría servir para fundar una excepción que supone precisamente verdad, en las imputaciones contra Georges y facultad en la Oficina que dictó la orden de desahucio en virtud de ellas.

Quinta cuestión.—Establecido que Courtin fué quien faltó al contrato sin que Georges diera el menor motivo, proceden las acciones deducidas por éste en el presente juicio?

La primera acción que Georges ha deducido, como queda dicho antes, es la de que Courtin le restituya la cantidad de doscientos pesos con más los réditos á razón del seis por ciento anual, cantidad que el mismo Courtin ha confesado tener en su poder y es procedente de las sucesivas deducciones, que durante diez meses y á razón de veinte pesos por cada uno, ha hecho á Georges de su sueldo, en cumplimiento del contrato. (Respuesta á las posiciones 9 y 12 cuaderno de prueba de Georges.) Esto supuesto, preguntamos: ¿está obligado Courtin á esa restitución? Sostener lo contrario importaría no sólo la interpretación más arbitraria é injusta de aquellas de las cláusulas de un contrato, á cuyo cumplimiento se ha faltado sin motivo y en favor del mismo que ha infringido sus estipulaciones; sino además la inconcebible

defensa, de que debe ser mantenido en la posesión y goce de dinero ajeno. aquel que precisamente se ha vuelto ya indigno de tales derechos. Sería la erección en principio, no sólo de la impunidad del robo, sino del premio otorgado al ladrón, por la donación de la cosa robada. Se hace necesario recordar los hechos. Entre Courtin y Georges se celebró el pacto de que aquel podría retener veinte pesos cada mes, del sueldo de Georges, con el objeto de estar aquel garantizado de que éste, cumpliría con las obligaciones que el contrato le imponía. Ese derecho pues, en favor de Courtin, no tenía otro objeto, que tranquilizar su ánimo en orden á la conducta de Georges, asegurar á aquel de que éste no abandonaría el servicio, por la esperanza de recobrar la parte retenida, pues seguramente en el ánimo de aquel de los contratantes á quien se reservó este derecho, debió surgir la natural idea, de que mientras en mayor número fuesen las retenciones de parte del sueldo de Georges, menos se resolvería éste á abandonar su colocación, privando á Courtin de los servicios que había juzgado necesario contratar. Si se pactó también que ese dinero ganase interés, esto no altera lo más mínimo el móvil de la obligación, porque se comprende que tal pacto no fué, pues lo contrario, se habría expresado claramente en el contrato, un mútuo común con causa de réditos, sino pura y exclusivamente como se desprende de todo el contexto del instrumento, y según acabamos de expresarlo, una forma escogitada por Courtin, para garantizarse contra Georges. Mas como el dinero es una cosa fungible y reproductiva, se consideró conveniente por el mismo Courtin, no retener la cantidad procedente del sueldo de Georges, sino á condición de abonar á éste el seis por ciento anual: lo que prueba por sobre toda consideración, que no se trata aquí de un préstamo de dinero hecho por Georges á Courtin por tiempo determinado, es, que como lo ha confesado éste (respuesta á las posiciones 12 y 13, cuaderno de prueba de Georges) durante los últimos cuatro meses, ó sean en los de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre, ya no hizo á Georges, ninguna deducción de su sueldo, sino que se lo pagó íntegro. ¿Cómo explicar esto, sino aceptando que el pacto en cuestión tenía por objeto el que hemos señalado? Si se rehusare esta interpretación, habría que decir para ser lógicos, que Courtin faltó al contrato, desde el primer mes en que ya no dedujo la parte convenida de su sueldo á Georges, para

que ésta unida á las otras, ganase interés en favor del mutualista. Courtin ha dado pues el mejor mentís á esta idea, renunciando de hecho y sin oposición por parte de Georges, á una estipulación establecida meramente en favor de aquel. Por manera que, y atendiendo sólo á los términos del contrato, que, como queda dicho no tenía por objeto un acto de préstamo de dinero de Georges á Courtin, sino de servicios de aquel á éste, fuerza es decidir, que el pacto que nos ocupa debè resolverse en vista de la conducta misma de aquel á quien tenía por objeto favorecer, en el sentido de que vuelva su dinero á Georges, con los intereses que le correspondan, ya que Courtin ha cesado de continuar poniéndose en el caso, de pagar intereses á Georges. Esto no es, sino aplicar en la especie el precepto contenido en el inciso III del art. 1325 del Código Civil.

Empero, no es de ninguna manera dudoso, cual sea la obligación de Courtin, en orden á esa cantidad procedente de los sueldos de Georges. Está éxpreso, volvemos á decirlo, en el contrato, que Courtin retendría una parte determinada de aquellos, para garantía suya propia. Ahora bien, ¿puede siquiera concebirse, que esa garantía subsista en poder de Courtin, despues de que él mismo ha separado á la persona de quien la había exigido, con lo cual se ha acabado el servicio á que aquella garantía resguardaba, y mucho después aún, de que el mismo Courtin había prescindido de hacer uso de ella, por no creerla ya necesaria? ¿De qué vá á continuar siendo garantía ese derecho de Courtin para retener un dinero que no le pertenece, si ya Georges no está á su servicio y no hay por lo mismo que garantizar? ¿Terminada la obligación principal, vá á continuar existiendo la accesoria, contraída precisamente con motivo y para resguardo de aquella?

Lo absurdo de estas cuestiones, nos dispensa de profundizar más en su estudio, obligándonos á entrar en un órden de ideas, á cuya claridad desaparecen todos los sofismas, que pudieran proponerse en contra de que Georges recobre lo que es suyo y que Courtin le retiene sin ningún objeto. Hemos demostrado que Courtin faltó al contrato celebrado con Georges, separándole del servicio que á aquel prestaba y privándole del sueldo á que tenía derecho. Y ¿no era uno de los derechos de Georges, recuperar al término del contrato la parte de sus sueldos retenida por Courtin? Si es así, ese derecho, en caso de no haber faltado Courtin

al contrato, había continuado naturalmente ejerciéndose por una y otra parte, hasta el fin de él; se ha convertido en actual y exigible por la conducta contraria, cayendo en la condición de todas las otras estipulaciones del mismo contrato (art. 1421 del Código Civil, 1458, 1459 y 1482 del mismo), Courtin, pues, está obligado á la restitución que Georges le demanda, por haber aquel faltado al contrato, en virtud de haberse colocado con esta conducta, en el deber de pagar á éste los daños que le ha causado con la falta de cumplimiento (arts. 1463 y 1464 del Código Civil.)

Y no se nos diga que el derecho de Courtin, para retener la cantidad de doscientos pesos de que se trata, debía de durar según los términos del contrato, tres años á cuyo solo fin empezaba á estar obligado á restituirlos, con sus intereses al propietario. Porque es claro que tratándose como se trata aquí, de una obligación bilateral, ella debía fenece desde el momento en que uno de los contratantes faltase á su cumplimiento. ¿Por qué? Porque la condición resolutoria, va siempre implícita en los contratos bilaterales, para el caso de que uno de los contratantes no cumpliera su obligación (art. 1349 de Código Civil.) Es el caso, entre otros, que la ley ha expresamente formulado, como excepción del principio que ordena, cómo las obligaciones á plazo no son exigibles sino al vencimiento de éste. Hay, en efecto, una sorprendente y casi tangible analogía, entre la hipótesis á que se refiere el art. 1361 del Código Civil, y la que, hablando de los contratos bilaterales en general, expresa el 1359 del mismo Código.

La segunda acción deducida por Georges en este juicio, se refiere al pago por Courtin de la cantidad de mil ochocientos cuarenta pesos, correspondientes á los meses, desde el 1º de Noviembre último, en que dejó de pagársele el sueldo que le correspondía, hasta el 1º de Septiembre de 1893, término del contrato. Establecido que conforme al contrato, que no ha sido debidamente objetado por la parte de Courtin, éste debía pagar á Georges la cantidad de ochenta pesos á contar desde el 1º de Septiembre de 1890, hasta el 1º del mismo mes de 1893, solo resta saber para la resolución de aquella cuestión, cuando ha hecho Courtin el último pago, por razón de sueldos á nuestro cliente. El mismo Courtin ha confesado haber pagado á Georges su sueldo de ochenta pesos, hasta Octubre último. (Respuesta á la posición 13, cuaderno de prueba de Georges), pues hasta el 3 de Noviembre

recibió sus servicios (Respuesta á la posición 3, cuaderno id), por haberse disgustado con él el mismo día. (Respuesta á la posición 5, cuaderno id.) Ahora bien, si Georges tenía derecho, en virtud del contrato, á ser reenumerado por sus servicios con el expresado sueldo, hasta el 1º de Septiembre de 1893, inconcusamente resulta que debe serle pagada toda la cantidad que suman esos sueldos, hasta aquella fecha, por aquel que debía pagárselos y que ha faltado al cumplimiento del contrato (arts. 1421 y 1459 del Código Civil), sin responsabilidad alguna por parte de Georges. Y como Courtin no ha probado de ninguna manera, que nuestro cliente hiciera nada, por donde aquel pudiera justificar su conducta, la aplicación de aquellos preceptos es irresistible en el caso, pues á no dudarlo, por efecto de la infracción del contrato ha quedado privado Georges de la garantía lícita, el pago de sus sueldos, que debiera haber obtenido por el cumplimiento de aquel, de una manera inmediata y directa á contar desde 1º de Noviembre último en adelante. (Arts. 1465 y 1466 del Código Civil). Esta consideración es tan importante, tratándose de un obrero como Georges, que en país extranjero, no tiene otro medio de vida que el precio de su trabajo, que al reclamar la cantidad mencionada, solo un resto de mal entendido respeto á su contratante, pudo hacerle considerar la cesación de sus sueldos como un perjuicio, cuando en realidad era un gran daño inferido por Courtin á su único patrimonio, su trabajo, del cual es equivalente el sueldo del obrero. Con todo; para el Abogado que patrocina los derechos de Georges, es indiferente este cambio de nombres, porque si bien es cierto que todas las acciones civiles, toman su nombre del contrato ó hechos á que se refieren, proceden en juicio, aún cuando no se exprese su nombre, con tal de que se determine con claridad, cual es la clase de prestación que exige del demandado y el título ó causa de aquellas. (Art. 25 del Código de procedimientos Civiles).

La tercera reclamación de Georges contra Courtin, se refiere á que éste le pague la cantidad de dos mil seiscientos sesenta pesos por alimentos y habitación, á razón de cuatro pesos diarios durante seiscientos sesenta y cinco días, ó sea desde 3 de Noviembre último, hasta 1º de Septiembre de 1893. El abogado que ha patrocinado este negocio, confiesa, á fuer de hombre honrado, no haber tenido base cierta y segura para precisar en una cantidad determinada, el importe de los alimentos

y habitación de su cliente, durante el tiempo que aun le falta de contrato. ¿Como podría haber logrado tal objeto, cuando para ese trabajo era inevitable fijarse en las circunstancias tan variables de la persona que reclamaba aquel derecho, en la posibilidad misma de la que debía satisfacerlo y en los cambios que se operaran, aun en el precio de los alimentos y de los inquilinatos? Expresó, pues una cantidad, de acuerdo con las instrucciones de su cliente y solo proponiéndose que el Juez fallase en el sentido de la obligación impuesta á Courtin por el contrato, á reserva de promover en la oportunidad legal, la liquidación correspondiente, conforme al art. 759 del Código de Procedimientos Civiles. Por manera, que haya ó no pruebas sobre el monto de la cantidad fijada, con motivo de este capítulo en la demanda, siempre resulta indubitable, que Courtin se comprometió á dar á Georges habitación y alimentos; que se los dió hasta, 3 de Noviembre según propia confesión: (Respuesta á la posición 4, cuaderno de prueba de Georges), y que por ser tal compromiso, extensivo á todo el tiempo del contrato, está aquel obligado á cumplirlo conforme á los arts. 1459 y 1465 del Código Civil. ¿Qué importa que Georges no haya probado cuanto debe valer en dinero y en el porvenir, su habitación y alimentos, si está demostrado de una manera fehaciente, que le asiste derecho para ambas cosas? Tampoco existe prueba sobre el monto de los gastos judiciales, á los que sin embargo debe ser condenado Courtin, por la misma razón de haber faltado al contrato, como se patentiza en las cuestiones siguientes:

Sexta y última cuestión.—Demostrado como está, que Courtin faltó al contrato de que nos hemos venido ocupando, no resta sino pedir al Juez se sirva condenarlo al pago de los gastos judiciales, conforme á los arts. 1483 del Código Civil y 143 del de Procedimientos.

México, Febrero 1º de 1892—Licenciado Agustín Verdugo.

Apuntes de alegato presentados á la 2ª Sala del Tribunal Superior por los Sres. Lics. Ramón Prida y Agustín Verdugo en la vista de la apelación interpuesta, por D. José de la Garza Falcón, del auto en que el Juez 3º de lo Criminal declaró prescrita la acción penal en el proceso instruido contra Felipe B. Córdoba, acusado del delito de falsificación.

Ciudadanos Presidente y Magistrados de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito.

Los suscritos defensores de Don Felipe B. Cordova, pedimos á la Sala se sirva declarar:

1: Que Don Felipe de la Garza Falcón, no es parte en estos autos.

2: Que la parte civil, no puede apelar de esta clase de autos; en consecuencia que no viniendo en grado la sentencia del Señor Juez tercero de Instrucción Criminal, no es revisable por esta Sala.

3: Que la acción penal para perseguir al Señor Cordova por los hechos que se le imputan, ha prescrito.

4: Que en consecuencia debe ser puesto en absoluta libertad.

5: Que son á cargo del Sr. Garza Falcón los gastos, costas, daños y perjuicios originados al Señor Cordova, con motivo de esta apelación.

HECHOS.

El Señor Don Victoriano Quijano, había heredado de su primera esposa, unos bienes, de los cuales dispuso por testamento otorgado ante el escribano Don Sebastian Peñaloza, en diez y siete de Diciembre de mil ochocientos ochenta y cinco. La Señora Concepción de la Garza Falcón, segunda esposa del Señor Quijano, presentó el testamento ante el Juez Cuarto de lo Civil, quien previos los trámites legales, mando protocolizar dicho testamento á pesar de las protestas del Señor Garza Falcón, al enterarse de su contenido. Y desde luego llamamos la atención de la Sala, que hasta el momento de conocer los términos del testamento, nadie había tenido la ocurrencia de declarar loco al desgraciado Señor Quijano. Conocida la voluntad del Señor Quijano, se instauró un juicio de nulidad en el cual, los testigos instrumentales declararon en contra de lo por ellos mismos expuesto en la apertura del testamento, y la tercera Sala ordenó se procediese contra dichos testigos, más el Señor Juez á quien se consignaron los hechos procedio en contra del Escribano Señor Peñaloza, y del heredero Señor Córdoba. La consignación se hizo, en veinte de Enero de mil ochocientos ochenta y nueve, y los Señores Córdoba y Peñaloza fueron declarados bien presos, en nueve de Diciembre de mil ochocientos ochenta y nueve.

Opuesta la excepción de prescripción de la acción por los suscritos, fué fallada por el Señor Juez Tercero, de conformidad con el pedimento del Mi-

nisterio Público en favor del procesado, y de esa resolución apeló sin derecho á nuestro juicio, el Señor Garza Falcón.

DERECHOS.

¿Cuales son los delitos imputados á Córdoba? El Señor Vazquez Tagle, nos dice que tres: la falsificación del testamento, hecho previsto en el artículo setecientos trece del Código Penal; el haber hecho uso del testamento falso, previsto en el artículo setecientos veinte, y el fraude penado en el artículo cuatrocientos treinta y dos. Examinemos los casos primeros.

A nuestro juicio los artículos setecientos veinte y setecientos trece son incompatibles, se refieren á hechos que no pueden ser ejecutados por una misma persona. En efecto, basta un ligero estudio de ambos artículos, para convencerse de que el artículo setecientos trece, prevee el acuerdo anterior á la falsificación y el setecientos veinte, el acuerdo posterior, es decir cuando ya la falsificación esta ejecutada. La ley castiga en este caso, como reo de falsificación al que sin haber tenido ningún participio en la falsificación, conociéndola y de acuerdo con el falsario, se propone aprovecharla. La ley ha querido evitar los intermediarios para hacer más difícil la consumacion del delito, pero esto supone el conocimiento de la falsificación cuando ya esta hecha; aleja por lo tanto la participación en la ejecución. Tenemos pues dos delitos en la falsificación de documentos: el del que ejecuta actos encaminados directa y necesariamente á la falsificación y el del que se aprovecha del documento ya falsificado. ¿Pueden co-existir ambos delitos? Creemos que no y la razón es clara. El que ha falsificado un documento, según el art. 713 puede estar sujeto á dos penalidades. Primera: si no ha hecho uso de él, á la marcada en el artículo 718 es decir la pena que resulte de la acumulación. Vemos entonces que la ley ha previsto, cuando el autor de la falsificación ha hecho uso del documento. Si pues la ley ha previsto el caso, en el art. 713, es claro que las prescripciones del 720 sólo pueden referirse al que no sea autor de la falsificación. Por otra parte, la redacción del artículo 720 demuestra que la ley quiso referirse allí, al caso de no ser el falsario mismo quien hiciese uso del documento falso. Y la relación de penalidad viene á corroborar nuestro aserto. Si el que hace uso del documento falso lo hace de acuerdo con el falsario, sufre la misma pena que él; si no lo hace de acuerdo sufre la pena del fraude, ó del delito que por medio de la

falsificación pueda cometerse. ¿Y que pena es la que debe sufrir el que hace uso de un documento falso? La del 713, porque la agravación que impone el art. 714 es meramente personal. Es una agravación inherente al cargo que se desempeña.

Ahora bien; las circunstancias puramente personales, y entre ellas tiene que contarse el cargo que se ejerce ó se desempeña no aprovechan, ni perjudican á los coautores según el texto expreso del art. 233 del Código Penal, de acuerdo con las teorías de todos los tratadistas. . . . ¿Y que es el aumento impuesto por el art 714 si no una agravación? ¿Y una agravación motivada unicamente por circunstancias puramente personales? Ahora bien; ¿qué hechos imputan á Córdoba?

El haber llevado al escribano Peñaloza cuando el Notario del Señor Quijano lo era el Señor Burgoa. Es decir: actos encaminados directa y necesariamente á la falsificación supuesta, toda vez que como tendremos el gusto de demostrarlo, en el juicio no ha existido tal falsificación.

De modo que conforme á los hechos imputados á Córdoba, la penalidad si fuese condena lo, sería la del art. 713 del Código Penal; para prescribirse pues se necesita que haya transcurrido un término igual á la pena, es decir tres años. Y es peregrina la idea de tomar en cuenta la multa para la prescripción, por que el art. 268 en su frac. 3ª dice: las demás acciones que nazcan de delito que tenga señalada una pena corporal &, se prescribirán en un término igual al de la pena. Es así que el delito de falsificación, tiene señalada una pena corporal, luego debe prescribirse en un término igual, al de la pena, esto es tres años. Y no cabe la distinción de tener señaladas dos penas el delito, primero porque el art. 268 dice una pena corporal, de manera que en habiendo pena corporal, aunque haya pecuniaria sólo á la corporal hay que atenderse, para la prescripción y con tanta más razón, cuanto que la ley usa la palabra término, que trae invivita la idea de tiempo, y la multa no es tiempo. Por otra parte, todos los tratadistas están conformes en que las penas accesorias, no deben tenerse en cuenta para la prescripción de la acción penal, más que cuando dejan de tener tal carácter y se convierten en penas principales. Existen muchas penas, que participan del carácter de principales en ciertos casos y de accesorias en otros. Así por ejemplo: la privación de derechos, es consecuencia de toda pena corporal; es por lo tanto accesoria en la mayor parte de los casos, pero se convierte en pena principal, por ejemplo, en los delitos de violación,

estupro &c. cuando el que los ejecuta es ascendiente ó descendiente de la víctima: en este caso, tendría pues que tenerse en cuenta esa pena, para la prescripción sin que pueda considerarse para tal efecto en los demás casos.

Sentado, pues, que las penas accesorias no deben tomarse en consideración, á efecto de calcular la prescripción de la acción penal, veamos que cosa es la multa; para tener una idea completa sobre este particular nos basta ver lo que la parte expositiva del Código Penal dice al hablar de la multa. Sus palabras son expresas. Es una pena accesoria.

Prescribe pues la pena del delito de falsificación en tres años; este, si se ha cometido lo fué en 17 de Diciembre de 1885; prescribió por lo tanto en 17 de Diciembre de 1888.

Pero queremos suponer, que como lo asienta el Señor Vazquez Tagle, deba reducirse la multa al arresto, conforme al artículo 119 del Código; entonces dice el Señor Vazquez, se ha necesitado el transcurso de tres años, tres meses, diez días. Aun en este supuesto, decimos que ha prescrito la acción penal. ¿Porqué? Porque conforme al artículo 275 del Código Penal, la prescripción se interrumpió el 20 de Enero, pero continuó el 24 de Enero del mismo año, porque el Jnez tercero, dejó de practicar diligencias desde el 23 de Enero hasta el 23 de Febrero. En consecuencia, conforme al final del art. 274, desde el 24 de Enero corrió otra vez la prescripción y no cesó de correr hasta el 7 de Diciembre en que se aprehendió á Córdova. Ahora bien; ¿no han transcurrido más de tres años, cien días desde el 17 de Diciembre de 85 hasta el 20 de Enero de 89 y desde el 24 de Enero de 89 hasta el 7 de Diciembre del mismo año? Indudablemente. Vemos pues que aún suponiendo que pudiera contarse el término, de la manera que el Señor Vazquez desea, la acción penal tiene que considerarse prescrita. Demostrada como está la inaplicación á Córdova del art. 720 del Código Penal, se hace innecesario estudiar la teoría que sobre delitos continuos exployó el ilustrado Señor Vazquez Tagle; pero deseando contestar aunque sea por cortesía á tan apreciable abogado diremos dos palabras. Los actos ejecutados por Córdova, tendrían que considerarse como simples tentativas, toda vez que el delito que se le puede imputar, es el de fraude y Córdova no ha llegado á obtener lucro alguno. Ahora bien; el art. 413 exige, para que haya fraude uno de estos elementos, que se apodere el delincuente de alguna cosa ilícitamente, ó que alcance

un lucro indebido ¿de qué cosa se ha apoderado Córdova? de nada ¿qué lucro indebido ha alcanzado? ninguno. No ha llegado por lo tanto á consumarse delito alguno. Los actos ejecutados por Córdova, tendrían pues que colocarse, si se probare que lo guiaba un móvil criminoso, entre los actos preparatorios del delito o cuando mucho como conato de delito. Ahora bien; existe la continuidad en los actos preparatorios? Nada más absurdo que tal idea. No canseremos á la Sala con citas más ó menos explícitas; nos bastará citar á Carrara en sus párrafos 517, 518 519 y la nota al primer párrafo por Baret, en la que discute esta cuestión. ¿Puede objetarse la continuación en la tentativa y en el delito frustrado? El problema en términos científicos puede reducirse á la siguiente fórmula: Para que haya delito continuo, basta que haya habido repetición de la consumación subjetiva?

Y la resuelve á nuestro juicio perfectamente en los términos siguientes: "Admitiendo la primera proposición, se llega al absurdo pues se harían continuos todos los delitos (y son muchos) que por su naturaleza exigen para repetirse una serie repetida de actos. ¿Cuántos trabajos de buril y de lima necesita un falsificador, para concluir una moneda falsa? De aquí se deduce que la continuación exige la repetición de la continuación objetiva.

En nuestro caso la cuestión es muy clara, los actos preparatorios del fraude según la ley constituyen un delito: el de falsificación, éste se ejecutó en diez y siete de Diciembre; desde tal día corrió la prescripción; el fraude no ha llegado á consumarse y no puede por lo tanto prescribirse; es absurda por lo tanto la teoría de suponerlo delito continuo y en vía por lo tanto de prescribir.

Pero seguiremos concediendo á nuestro estimado contrincante; supongamos que en efecto los actos de Córdova puedan estimarse como delito continuo. ¿Qué delito es el continuo? No el de falsificación, que como hemos dicho es un medio preparatorio para cometer un fraude, sino más bien éste que es el punto objetivo; en ese caso tendríamos que los hechos de Córdova, se han encaminado á la comisión de un delito, por el cual no se le persigue, porque como ha dicho muy bien el Señor Vazquez, el auto de prisión preventiva sólo habla de la falsedad. Ahora bien: este delito de fraude ha tenido su último acto de ejecución en Julio de 1890, hasta la fecha, Diciembre de 1991 no se ha procedido por el contra Córdova; ha prescrito por lo tanto, toda vez que según el art. 432 su pena

es de multa y esta conforme á la fracción 1ª del art. 268 prescribe en un año. Así pues aun admitiendo la teoría de continuidad, tan malamente explotada por el Lic. Vazquez, tendríamos que considerar prescrito el delito imputado á Córdoba y los que se le quieren imputar ahora, toda vez que nuestro amigo, acepta como exacta y correcta la interpretación que el Señor Agente del Ministerio Público dá al art. 271 del Código Penal.

Y no fué por cierto la de 23 de Enero, la única interrupción en el proceso, pues dejó de actuarse del 5 al 25 de Abril, del 8 de Mayo al 6 de Julio, de este día al 26 del mismo, del 21 de Septiembre al 11 de Noviembre, y de este al 2 de Diciembre.

¿Pero cual fué la mente del legislador? Es indudable que los autores del Código quisieron que las acciones penales, prescribieran en el plazo señalado para la pena corporal. . . .

Ya hemos hecho mención de la frase *una pena corporal* y hemos dicho que al decir esto la ley quiso marcar perfectamente, que en habiendo pena corporal, aunque hubiera la pena de multa, había que atenerse, á la primera, pero ahora haremos otro argumento más claro. La multa han dicho los autores del Código, es una gran pena y por eso la hemos puesto como accesoria en una gran parte de los delitos. Al mismo tiempo han dicho, que querían dejar un arbitrio muy lato á los Jueces y por eso señalaban extremos grandes en las multas, para que el arbitrio judicial supliera los inconvenientes que tal sistema traería en la práctica. Si pues hubiera de tomarse en cuenta la multa, para la prescripción, resultarían grandes vacilaciones é inconvenientes en virtud del sistema adoptado por el Código, por que nadie sabría la multa que el juez deseara imponer. Y los autores del Código nos dicen en su parte expositiva, que para computar la prescripción han seguido una regla nueva, pero que es un medio seguro y fácil de calcularla; de aquí se deduce que ellos se atuvieron al tiempo señalado como prisión, en los casos que esta era la pena principal.

Para robustecer nuestras ideas sobre el particular, nos bastará estudiar brevemente el art. 295 del Código Penal, en donde al hablar de la prescripción de la pena, nos dice que se prescriben por el trascurso de un término igual, al que debía durar la pena etc. De modo que la ley ha expresado claramente que se refiere á tiempo y como el Legislador tuvo igual criterio, al hablar de prescripción de

acciones, que al hablar de prescripción de penas, es evidente que al tiempo que dure la pena principal debe referirse el tiempo para la prescripción.

El argumento que podría hacerse de la injusticia de que prescribiera en igual plazo una acción penal, que solo daría lugar á prisión, y otra que tuviese igual pena, más la de multa, no puede tomarse en consideración. La pena tiene dos objetos la satisfacción penal y el castigo de culpable; la multa no persigue más que el último resultado. La prescripción como de derecho público, se refiere unicamente al primer objeto; para la sociedad, pues su principal mira que es el mantenimiento del orden social y del respeto, consideración mutua entre sus asociados, se obtiene esencialmente con la pena corporal. No es decir esto que la pena corporal no produzca efecto inmediato en el delincuente, sí lo produce, pero mayor efecto produce tal pena, en el resto de los asociados. Así pues la justicia no está reñida con la interpretación que nosotros damos á la ley sobre prescripción y que á no dudarlo es la equitativa y legal.

Pasemos á estudiar la segunda cuestión.—Es cuestión de obvio derecho, que solo el litigante en cuyo perjuicio se viola la ley ó un derecho puede interponer un recurso legal, en tal virtud debemos ver si la parte civil tiene violado aquí algún derecho. El derecho penal moderno, tiende á alejar por completo á los particulares del juicio criminal, y la evolución que este efecto se ha venido desarrollando es claro; ya la facultad de instaurar su acción ante el Juez de lo Civil ó de lo Criminal que le permite ir ó no á este último juicio, ya la institución del Ministerio Público que lo aleja por completo de la acusación. La nueva ley de Jurados dió una entrada bastante amplia á la parte civil, pero no pudo darle facultades que no podía competirle. Así pues, no pudo concederle la consignación de los delitos, porque esto pertenece exclusivamente á la acción pública, como no pudo darle intervención en las cuestiones de prescripción, porque tambien pertenecen exclusivamente á la acción pública. Dióle facultad de intervenir con voz informativa, en los casos de excepciones y en eso hizo perfectamente, pero no le dió, ni pudo darle el derecho de apelar, más que cuando sus intereses se lastimaban. Así, por ejemplo, en el artículo 135 le dió el derecho de apelar de la sentencia del Juez, Presidente de los debates que fuera absolutoria, porque una absolución puede matar sus derechos como parte civil,

y era natural, dentro del criterio, de la comisión darle este derecho; pero la prescripción ni mata ni aminora los derechos de la parte Civil. Luego es evidente que la ley, no pudo comprender entre sus derechos el apelado en estos casos. Y tan no pierde sus derechos la parte civil, que el Código de Procedimientos penales en su artículo citado lo declara expresamente.

Por otra parte el art. 58 del Código de Procedimientos Penales, niega á la parte civil el derecho de intervenir en los incidentes sobre soltura de reos y por más que álguien crea derogado dicho artículo por la nueva ley, tal interpretación es inadmisibile, porque las derogaciones para ser validas deben ser expresas y habiendo enumerado la ley de 24 de Junio los art. del Código, que quedaban derogados, es evidente, que los no enumerados quedaban vigentes. Es cierto que dicho artículo agregó: "y los demás artículos que se opondan á esta ley," pero aparte de que es muy discutible la validez de una derogación hecha en esos términos, veamos si el art. 58 se opone á esa ley especialmente en el caso actual. Es evidente que la ley no pudo confiar á la parte civil, el ejercicio de la acción pública, el objeto fué equiparar á la parte civil con el Ministerio Público; pero siempre cada uno con su respectiva acción: la parte civil con su acción civil y el Ministerio público, con su acción penal. Así al menos hay que interpretar la ley toda vez que no dió derecho á la parte civil para modificar la acusación del Ministerio Público, sino que dejó exclusivamente á éste, este derecho, concediendo únicamente al Juez el de llamar la atención del jefe del Ministerio Público; pero la acusación quedó exclusivamente en manos del Ministerio Público; vemos, pues, que no fué tan lato el poder de que se quiso armar á la parte civil y que únicamente se le reservaron los derechos para hacer fructífera su acción civil. Así, por ejemplo se le dió el derecho de presentar pruebas, porque ellas iban á tener influencia en la declaración de culpabilidad, baco de su derecho; la misma influencia ejerce en la conclusión de la instrucción y por eso se le dió el derecho de apelar cuando á su juicio no esté concluida. En todos los casos, ven los jueces que los únicos derechos que se le han concedido á la parte civil, son aquellos cuyo ejercicio viene á tener influencia sobre sus intereses; tenemos pues, que concluir que en todos aquellos incidentes que se refieran exclusivamente al ejercicio de la acción penal, la parte civil, solo puede

tenér voz informativa. Es así que las prescripciones de derecho público como para la PARTE CIVIL EN NADA SE MINORAN SUS DERECHOS con la declaración de prescripción, luego es evidente que no tiene derecho de apelar.

Por otra parte es máxima de derecho, que lo odioso debe restringirse y no diciéndo expresamente el art 26 de la ley de Jurados, que la parte civil tiene esos derechos, debe negársele, porque nada más odioso que la libertad de un hombre dependa de la voluntad de su enemigo. Recordamos lo dicho más arriba: el art. 10, transitorio de la ley de Jurados, no ha derogado expresamente el 58 del Código de Procedimientos Penales, y en tal concepto la parte Civil, no tiene el derecho de abrir en estos casos la segunda instancia.

Hemos estudiado las cuestiones anteriores por deseo de contribuir por nuestra parte al estudio de puntos tan importantes como los que se discuten en este proceso, pero para los derechos que representamos nos basta demostrar la primera cuestión propuesta y vamos á procurar hacerlo brevemente.

Como lo demuestra la copia presentada por los suscritos el día de la vista, en primero de Enero del noventa, el Sr. Juez tercero pronunció auto desechando la excepción de litispendencia, propuesta por el demandado y mandando que continuara el traslado por lo relativo á la personalidad. De este auto, notificado el Sr. Garza Falcón expresó su conformidad. De modo que en Enero primero declaraba el Sr. Juez que la personalidad del Sr. Garza Falcón era dudosa, por lo tanto, mientras no hubiera un auto declarándolo con tal personalidad, es decir, declarándolo que realmente la tenía, no podía abrirse un juicio ni obligar al acusado á contestar la demanda. Ese auto no se ha pronunciado, aun más, en dos años, el Sr. Garza Falcón no ha evacuado ese traslado, luego es claro que no tiene personalidad legítima comprobada en los autos y por lo tanto no puede ejercitar los derechos de parte civil, aunque ésta como creemos haberlo demostrado, no tiene ningún derecho para apelar de los autos.

Decíamos que habiéndose conformado el Señor Garza Falcón con el auto de 1º de Enero de 90, admitió que era dudosa su personalidad; en tal virtud, él mismo debió comprobarla á satisfacción del Sr. Juez tercero, y no dejar pasar dos años sin gestión alguna. Este lapso de tiempo nos indica, ó la imposibilidad para Garza Falcón de demostrar

su personalidad, ó su deseo de abandonar la acción intentada. En todo caso tenemos: que el juicio no está iniciado, por no haberse constituido en forma la demanda. Habiéndose puesto defectos á la demanda y defectos que no debían ser falsos ni ridículos, porque entonces el Sr. Juez en vez de mandar dar traslado, debía haber aplicado las disposiciones de los art. 1064 y 1065 del Código Penal, ó las análogas del de Procedimientos. Creemos inútil extendernos en demostrar que el litigante, cuya personalidad no está admitida por el auto del Juez, no puede considerarse como tal parte. Sería ofender la ilustración de la Sala.

¿Por qué se admitió al Sr. Garza Falcón como parte en el Incidente sobre excepciones? La razón es muy clara, el Incidente sobre responsabilidad civil se había dejado dormir por el actor. Al recibirse del Juzgado el nuevo Secretario, Sr. Robles, por muerte de su antecesor, fué laborioso recibir el Juzgado, y el Incidente sobre responsabilidad civil no apareció sino muy tarde, cuando nosotros le vimos ya había pasado la primera audiencia, ya el Sr. Juez tercero había admitido la apelación del Sr. Garza Falcón. Pero todas estas circunstancias involuntarias, no han podido darle á dicho Señor la personalidad de que carece.

Como la segunda instancia no puede abrirse hoy que los juicios de revisión han sido suprimidos, más que á petición legítima, es evidente que careciendo de esta cualidad el Sr. Garza Falcón, no puede la Sala revisar la sentencia del inferior, conforme á derecho que viene en grado.

Como el Sr. Garza Falcón debía saber que no era parte en este juicio, y debido á sus gestiones el Sr. Cordoba ha tenido que hacer nuevos gastos y ha sufrido una prisión injusta, deben ser á cargo del Sr. Garza Falcón los gastos, costas, daños y perjuicios al Sr. Cordoba, en tal concepto debe declararse así por la Sala ó reservar al Sr. Cordoba sus derechos.

Antes de reasumir estos apuntes vamos á presentar una autoridad que la dé á nuestras teorías desarrolladas en estos apuntes con relación á la prescripción. Hemos dicho que para la prescripción del delito de falsificación basta el lapso de tres años y que en él se prescriben la pena corporal y la multa; en apoyo de nuestro aserto citaremos el art. 94 del Código Penal Belga de 15 de Octubre de 1867, que dice así: "Las penas de quedar sometido á la vigilancia e especial de la policía,

la multa y la confiscación especial se prescribirán en los plazos fijados en los art. precedentes, según que sean pronunciadas por crímenes, delitos ó contravenciones." Es á á nuestro juicio el mejor comentario que podemos hacer: pero si desearamos citar textos, citaríamos la exposición de motivos y muy especialmente el dictámen de la Comisión del Senado al discutirse el proyecto Belga. El artículo 94 del Código Belga, fué sin duda alguna el que tuvieron presente los autores de nuestro Código y su letra tiene que servirnos para interpretar legalmente nuestro artículo 268.

Hemos concluido y creemos, haber demostrado que el delito de falsificación, que se imputa al Sr. Cordova ha prescrito, que la Sala carece de jurisdicción para revocar el auto del Sr. Juez tercero de lo criminal por no ser apelable dicho auto por la parte civil, y porque aunque lo fuera no está demostrada la personalidad del Sr. Garza Falcón.

En consecuencia, tenemos que pedir á la Sala, se sirva fallar como hemos pedido al principio, mandando poner desde luego en libertad á Don Felipe Cordova, que es lo que la justicia y la equidad reclaman.—México. Diciembre 29 de 1891. —Ramon Prida.—Agustín Verdugo.

Sección Médico-Legal.

REFORMA INDISPENSABLE EN LA APLICACION JUDICIAL DE LA ULTIMA PENA UN MEDIO MAS ADECUADO

No hay tormento.—Éxito seguro.—Facilidades para su aplicacion.—Aparato que requiere

REFLEXIONES

Con motivo de los acontecimientos últimos, que toda la prensa ha señalado, respecto á las ejecuciones verificadas en la cárcel de Belem y á propósito de alguna idea emitida por el Dr. Fernández Ortigosa que indicaba hace poco en este periódico la facilidad con que el asesino mata y la dificultad que la ley tiene para aplicar la última pena, dicho Doctor censura, con justicia, los medios habituales de fusilamiento, guillotina, garrote, horca, etc., y

se reserva para indicar más tarde algún otro procedimiento que no deja aún ni traslucir. Opino del mismo modo. Creo que en la sentencia de muerte hay dos terribles martirios, el uno las horas que transcurren desde la notificación hasta la ejecución; y el otro la ejecución misma.

El primero imposible es suprimirlo del todo, porque la ley no debe matar á mansalva, nivelándose con el criminal, mas sí puede acortar el tiempo del suplicio, no dejando transcurrir tantas horas entre la notificación y la ejecución. La prensa toda ha clamado en este sentido, y seguro es que la reforma vendrá.

Mas queda la segunda parte y es la ejecución. Esta, por cualquiera de los mecanismos citados, causa pavor á los mismos reos, y no son pocos los que ruegan á propósito del fusilamiento, "que no les peguen en la cara". . . . "que les apunten bién al corazón ó la cabeza para morir pronto". . . .

Recomendaciones de esta especie, dejan comprender lo que pasará por la imaginación del reo, exaltándose más y más con la idea de su suplicio; horrorizándose muchos de ellos con la mutilación que deben sufrir. No lo es menos con la guillotina, la horca y el garrote. A tal punto alcanza este negocio, que nuestros vecinos del Norte, con toda justicia se preocupan del asunto, llegando á creer salvada la dificultad, con la aplicación de la electricidad.

Por aquellos días hallábame en Nueva York. A pude ver los modelos en el Edem Museo. Supe después los resultados obtenidos, que salieron contraproducentes, sufriendo el reo peor y mucho más, que con cualquiera otro de los mecanismos usuales.

De entonces y aun de más antes, me había ocurrido la idea, de proponer para la aplicación de la última pena, un medio tan suave y tan dulce como seguro.

La acción del cloroformo, perfectamente definida por la ciencia médica, obedece á principios conocidos hasta en sus más íntimos detalles. Según el objeto ó indicación terapéutica que se desea, se hace variar la técnica de aplicación.

Una misma dosis de cloroformo, 100 gramos por ejemplo, pueden producir, á voluntad según el objeto con que se administra: anestesia completa de dos á seis horas; semi-anestesia de cuatro á ocho horas; alternativas de sueño y vigilia que pueden

prolongarse (siempre con la misma dosis de 100 gramos) hasta por doce horas, y por último, la cesación de la vida que puede verificarse en menos de 20 minutos.

No vamos á analizar cada una de estas variantes; nos ocuparemos exclusivamente de la última, tomada como cuchilla de la ley, para realizar una sentencia dolorosa, sensible, pero que la civilización y el progreso no han podido aún suprimir.

En el terreno médico y en el uso racional del cloroformo, ¿porqué no se produce la muerte con la administración habitual de este tóxico? Porque no se le deja ejercer su acción aislada en la economía, siendo trivial el principio de administrar. lo en dosis pequeñas, y en mezcla competente con el aire. Dedúcese de ahí, que si su aplicación se hace á la inversa, en dosis alta y sin mezcla de aire, la resultante evidente es la cesación de la vida, y esto en pocos minutos.

Existe en medicina un procedimiento de aplicación del cloroformo que rápidamente, en 5 ó 10 minutos, conduce á la anestesia. Llámase este procedimiento *por sideración* y consiste en hacer absorber á la persona que pretende anestesiarle fuertes cantidades del cloroformo, pero siempre en mezcla con el aire.

Adminístrese por sideración, suprimiendo esa mezcla con el aire y entonces la resultante será la muerte, en pocos minutos.

Principio rudimentario es en la aplicación del cloroformo, que la administración se haga, hallándose acostado el paciente. Proviene esto de que las dos causas esenciales que pueden producir la muerte, durante la aplicación del cloroformo, son: la asfixia y el síncope. A la primera se obvia, mezclando el anestésico con el aire; á la segunda haciendo llegar fácilmente la sangre al cerebro, lo que se consigue por la posición indicada. Esto claramente señala, que si se llenan las dos indicaciones opuestas: administración del anestésico sin mezcla y en posición sentado, la cesación de la vida será, y lo es de hecho, mucho más rápida.

El organismo en sus manifestaciones, obedece á las mismas leyes, no hacen excepción los otros seres de la escala animal, particularmente aquellos, que por la perfección de su máquina, se aproximan más á la especie humana.

Asentado este principio de fisiología comparada, fácil me será demostrar que la muerte puede producirse en unos cuantos minutos. Experimentando sobre perros de talla regular, hace algunos años

obtenía el resultado siguiente: cuatro ó cinco gramos de cloroformo en un pañuelo en forma de alcatraz y rodeado de una tela impermeable, producían en 5 minutos una anestesia tan completa, que permitía la trepanación del cráneo, (operación muy dolorosa) sin la menor manifestación sensible por parte del animal. A esa altura, si se combinaba la administración en igual dosis (de 4 á 5 gramos) absorbidos en conjunto, sobrevénía rápidamente la muerte del animal.

Hasta hoy, en mi ya larga práctica, no me ha ocurrido percance serio con el cloroformo, pero conozco algunos hechos accidentales y otro intencional, pues se trató de suicidio. En los hechos á que aludo la muerte no se ha hecho esperar. Contemplan además con que las condiciones en que generalmente se administra, son las más inadecuadas para que sobrevenga la muerte; ó hablando en términos positivos: *condiciones ordinarias de administración del cloroformo, son las convenientes para evitar accidentes.*

Ya hemos insistido lo suficiente para demostrar con la teoría y la práctica, el resultado seguro de condiciones opuestas.

Señalo á continuación el aparato que convendría:

Un sillón de respaldo casi recto; apoyada la cabeza, queda sostenida de las sienes, por un par de aletas fijas, pasando de la una á la otra: una tira de cuero ó piel resistente que se atiranta y sujeta con hebillas. Este cuero sujeta la frente del criminal. Más abajo los tirantes, sujetos al respaldo del sillón, consistiendo en un par de correas anchas, que pasando al nivel de las axilas, dan vuelta sobre los hombros y sujetan fuertemente el tronco en su parte superior. Asegurada así la cabeza y el tronco, el resto del cuerpo puede permanecer libre ó si se quiere atado, no implica esto complicación ni dificultad alguna. Hechos estos preparativos, que bien combinados no pueden tardar más allá de 2 á 4 minutos, resta la parte esencial, la aplicación de la máscara. Supongamos esta una media calota de madera, cristal ó lámina metálica, fácilmente adaptable á la cara, pudiéndose fijar igualmente por una ó dos correas: dicha calota lleva en su interior una esponja que corresponde á la extremidad inferior de un tubo, cuyo extremo superior, ensanchado en forma de embudo, permite verter el anestésico, llegando este directamente á la esponja y siendo allí forzosamente aspirado por el criminal.

En estas condiciones y con este mecanismo,

garantizo que ántes de 15 minutos se produce la muerte y por la experiencia personal que tengo de la absorción del cloroformo, en dos veces que he necesitado la anestesia, así como las innumerables ocasiones que he hecho anestesiar á otros ó los he anestesiado yo mismo. garantizo, repito, que el sueño producido es de lo más agradable y más completo. Ese sueño clorofórmico, podría llamarse un fragmento suprimido de la duración de la vida.

Convírtase pues para el criminal, no en un fragmento, sino en el todo, y en vez de los terrores aparatos de mutilación; la horca, garrote, guillotina, balazos, etc., hágasele morir dulce y tranquilamente por un mecanismo que no mutila el cuerpo, que no causa pavor ¡que ménos que hacer tan insignificante caridad con el pobre criminal!..

Analícemos ahora los inconvenientes que pueden hacersele.

No creo pudiera reputarse así la necesidad de que un médico presencie el acto, porque esto es bien sabido: por ley debe presenciar las ejecuciones tanto civiles como militares, tampoco que en este caso, pudiera considerársele como verdugo. Su papel es enteramente igual al que desempeña en los fusilamientos y así como en ellos ordena un tiro más, en este caso puede determinar 40 ó 50 gramos más de cloroformo, para completar el síncope y la asfixia.

Los inconvenientes por parte del criminal; parece que oigo citar la posibilidad de que alguna vez no se cloroformen; mucho lo dudo, porque á dosis fuertes de cloroformo y administrado por sibilación, ni los más contumaces alcohólicos escapan; por el contrario, ellos mueren más aprisa bien absorbido el cloroformo. Casi podríamos decir que la mayoría de los pocos hechos desgraciados, que la ciencia cuenta de muertes por el cloroformo, se registran bajo ese título "alcohólicos retractorios al cloroformo." Mas como en el hecho de la aplicación del anestésico por la ley no se procede de igual modo que en la anestesia médica, las dosis fuertes vencen de igual modo al débil que al fuerte, al intemperante que al de costumbres morigeradas.

Otro inconveniente que quizá podrían señalar: la violencia en algunos casos de la excitación clorofórmica. Por regla general podemos asentar que mientras mayores sean las dosis que se administran, la excitación es más ligera, y en algunos casos nula.

El miedo para aspirarlo, podría ser otro incon-

veniente puesto que la práctica enseña que las personas miedosas tardan mucho en dormir. Esto es absolutamente cierto, para la anestesia terapéutica, pero tiene que dejar de serlo en la anestesia por ley, puesto que allí las grandes dosis darán prontamente cuenta de todo. En suma, es un procedimiento absolutamente justificado para ensayarse, que no tiene los inconvenientes de la electricidad, puesto que en aquella como en cualquiera otro procedimiento, precede un periodo que bien se podría llamar de martirio, y en el que yo propongo no es así: vencidas las dos ó tres primeras inspiraciones que molestan un poco, sigue luego el hormigueo general agradable, que precede al sueño y llegado este, lo que se logra rápidamente cuando se aspiran dosis altas; es un sueño tranquilo profundo, sin conciencia de nada, en medio del cual se hará sobrevénir la muerte, rompiendo, sin mutilación ni estruendo, el lazo que á la vida nos uné.

Para concluir, pueden probarse estas aseveraciones en perros de cualquiera talla, y si la autoridad toma en consideración el medio que indicamos, fácil es ensayarle en el primer sentenciado, bajo la dirección del médico de cárceles, ahorrándole así la vista del patíbulo, sustituyéndole aquel terrible aparato con el muy sencillo del sueño anestésico, como prólogo de su muerte.

Dr. Demetrio Mejía.

Variedades forenses.

En Morelia, capital del Estado de Michoacán, acaba de sustentar el exámen recepcional de abogado, el jóven Don Salvador Cortés Rubio.

Ha quedado vacante el Juzgado de 1ª Instancia de Tetecala, Estado de Morelos, por fallecimiento del Sr. Lic. D. José Flores Valver de que servía con general beneplácito aquel empleo.

Nuestro querido amigo, el apreciable Sr. Lic. D. Vicente Rodríguez Miramón, acaba de obtener del Ejecutivo Federal,

la honrosa cuanto merecida distinción de ser por tercera vez nombrado Juez de Distrito en el Estado de México, después de ocho años consecutivos de servir ese empleo con honradez, pericia y laboriosidad.

Enviamos en estas líneas á nuestro antiguo compañero y amigo la expresión de nuestros más fervientes deseos por su felicidad.

El Sr. Lic. Don Jesús Gómez del Palacio, defensor de oficio en el fuero militar, ha renunciado el cargo que desempeñaba, pidiendo su baja en el ejército, en el que con motivo de su empleo tenía el grado de teniente coronel.

Están ya para terminarse las reparaciones y nuevas obras de decorado, que se han estado trabajando en el 2º Salón de Jurados del Palacio de Justicia. Tanto por lo que hemos visto, como por los informes que de buena fuente tenemos, estamos en aptitud de asegurar que aquel Salón, quedará arreglado hasta lujosamente, correspondiendo á la vital importancia y dignidad del solemne acto, que en él habitualmente se verifica. El encargado de la obra ha sido el Sr. Don José Barrera, bajo la hábil y experimentada dirección del Sr. Juez 1º de lo Criminal.

Advertencia

Los suscritores á este semanario, pueden consultar á esta redacción sobre cualquier punto de derecho, en la inteligencia de que las consultas serán despachadas y publicadas gratis en aquel.